

C.A. de Temuco

Temuco, veinte de enero de dos mil veintitrés.

Visto:

Primero: Que el recurso de apelación es un medio de impugnación que se encuentra reglado en nuestro Código Procesal Penal, en sus artículos 364 y siguientes. El artículo 367 de dicho cuerpo legal, se encarga de indicar la forma de interposición del recurso, señalando expresamente que se debe realizar por escrito, con indicación de sus fundamentos y peticiones concretas. Consecuencia de lo anterior, es que la competencia de la Corte de Apelaciones queda delimitada por las peticiones precisas y los argumentos desarrollados en el acto jurídico procesal escrito; admitir una cuestión distinta implicaría indefensión para los intervinientes recurridos. Conforme lo anterior, es que esta Corte se dedicará a conocer de aquello pretendido por la parte apelante, en base a los argumentos que señala en su libelo recursivo.

Segundo: Que, en ese contexto, revisado el recurso interpuesto por el apoderado del acusado, se verifica que el reproche que se efectúa a la resolución en alzada se fundamenta en la especialidad de la Ley 12.927. En efecto, señala la defensa que la norma de orden público del artículo 27 b) de la referida ley, prohíbe la acumulación de delitos diversos a los contenidos en dicha ley, lo que para el caso de marras significaría que la persecución de los delitos del derecho penal común imputados a su defendido (usurpación violenta, hurto, atentado contra la autoridad), no pueden ser acumulados a los del artículo 6 de la señalada ley. Concluye indicando que el juez a quo no es el juez natural y obvio y que es incompetente para seguir conociendo de los citados hechos, pidiendo se ordene remitir los antecedentes al juez competente.

Tercero: Que la norma en que se asila su argumentación la defensa, señala expresamente lo siguiente



“La tramitación de estos procesos se ajustará a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, con las modificaciones que se expresan a continuación:

b) La acumulación de investigaciones sólo tendrá lugar si en ellas se persiguen delitos previstos en esta ley”.

Cuarto: Que la norma en comento, lo que regula expresamente es la acumulación de investigaciones, actividad procesal que corresponde al Ministerio Público, sin que contenga regulación relativa a la competencia del Tribunal. En efecto, el artículo en cuestión se refiere concretamente a la acumulación de investigaciones, lo que incumbe de manera excluyente al ente persecutor y que por ende es totalmente ajeno a la actividad del órgano jurisdiccional. En otras palabras, la norma en que se asila el recurso, no dice relación con el debate que pretende plantear la defensa.

Quinto: Que cabe destacar además, que pese a que el reproche de la defensa dice relación con la competencia del Tribunal, el impugnante no menciona alguna otra norma como sustento de su reclamo que diga relación con la faz absoluta o relativa de tal institución, de manera que descartado el artículo de la ley 12.927 como una útil para resolver la controversia, no se avizora fundamento normativo -que haya sido invocado por el impugnante en su libelo recursivo- para modificar lo decidido por el tribunal de primera instancia.

Sexto: Que cabe subrayar asimismo, que el recurso asevera que el juez de primera instancia no es competente -no es el juez natural se indica expresamente en el recurso- sin embargo no dilucida cuál sería el tribunal competente según su parecer.

Séptimo: Que finalmente y a mayor abundamiento, cabe resaltar que la hipótesis fáctica contemplada en la norma en que se sustenta el recurso, es una que en el presente ya no concurre, pues la respectiva investigación del Ministerio Público se encuentra cerrada.



Octavo: Que, así las cosas, no siendo acertados los argumentos a partir de los cuales se estructura el recurso llamado a conocer por este Tribunal conforme se ha expresado el considerando primero de este fallo, forzoso será confirmar la resolución en alzada.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 364 y siguientes del Código Procesal Penal, artículo 157 y 159 del Código Orgánico de Tribunales, **SE CONFIRMA** la resolución en alzada de fecha nueve de enero de dos mil veintitrés, que no hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento de incompetencia, planteada por la defensa del acusado Héctor Javier Llaitul Carrillanca.

Notifíquese, agréguese a su carpeta digital y devuélvase.-

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Alexis Gómez Valdivia.

Rol N° Penal-20-2023.(jog)



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por Ministro Suplente Luis Alberto Olivares A., Fiscal Judicial Juan Bladimiro Santana S. y Abogado Integrante Alexis Salvador Gomez V. Temuco, veinte de enero de dos mil veintitrés.

En Temuco, a veinte de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

